

queja, estando demostrada la violacion de garantías, que apoyado en el artículo 5º de la Constitucion federal ha reclamado. Por lo expuesto y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Puebla á ocho del corriente Abril, por la cual declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio Serrano, por haber sido destinado al servicio de las armas por el C. Gefe del batallon número 19 de infantería.—Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon—Juan J. de la Garza.—José Arteaga,—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Aza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 24 de 1873.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Lic. Mariano Antunez juez 2º de lo civil de esa capital, contra el auto de la 1ª Sala del Tribunal superior del distrito que lo suspendió por seis meses privándole de sueldo.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

Ciudadano Juez.

El Promotor dice: que el Lic. Mariano Antunez interpone el recurso de amparo con-

tra la parte incidental de una sentencia dictada por la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito en un recurso de competencia, imponiéndole al C. Antunez la pena de suspension del empleo que como Juez 2º de lo civil ha desempeñado y además la privacion del correspondiente sueldo durante los seis meses de la suspension del empleo, con lo que considera violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 14, 20 y 22 de la Constitucion general de la República.—La 1ª Sala del Tribunal como autoridad responsable del acto reclamado se limitó á remitir, por vía del informe proscrito por la ley reglamentaria de los juicios de amparo, la copia de la sentencia en que se consignan los hechos que motivan la queja sin que se haya dado por parte de la 1ª Sala ninguna mayor explicacion, creyendo acoso que en los considerandos en que se fundó para dictar esa resolucion están consignadas las razones que se tuvieron para la imposicion de la pena al C. Juez 2º de lo civil.

El Promotor al formular este pedimento no cree oportuno ocuparse de un punto que hasta ahora no se tiene enteramente resuelto, de manera que con toda la seguridad y conciencia que inspira la conviccion de una materia que ha dejado de tenerse como cuestionable y ha pasado de la calidad de contravertible á la esfera de lo que científicamente se debe tener por una verdad. Se trata pues, del punto referente á la inconstitucionalidad del artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 reglamentaria de los juicios de amparo que los declara inadmisibles en negocios judiciales como el presente, y por lo mismo de esta cuestion que puede considerarse sostenible por ámbos extremos, en caso de admitir alguno de ellos, se decidirá por el contenido de dicho artículo 8º supuesto que la ley se expidió por quien tenia plena facultad para ello conforme á la misma Constitucion.

Mas como el amparo se interpone principalmente contra lo que importa la pena,

y esta efectivamente traspasa los límites marcados en los artículos 21 y 22 de la Constitución; por otra parte, el Juez 2º de lo civil en el incidente del juicio universal del concurso de Echarrén, obraba, en concepto del que suscribe, por ministerio de la ley de 14 de Febrero de 1856 para hacerla efectiva en lo concerniente al pago de la multa; si la hubiera acatado en esas prescripciones bien terminantes, habría también procedido contra una ley expresa, y en consecuencia, esta consideración hace que la pena que se le ha impuesto al C. Juez Antúnez, importe una violación del artículo 22 de la Constitución, siendo esto tanto más duro para el Juez 2º de lo civil, cuanto que al Juez 1º de Distrito Lic. Sancha, á quien juzgó la misma 1ª Sala del Tribunal Superior en calidad de Tribunal de Circuito, no le privó de la percepción absoluta del sueldo durante la secuela del juicio. Así es, que por esta circunstancia que puede tomarse en cuenta, la pena impuesta al C. Antúnez debe considerarse excesiva, y por consiguiente en desacuerdo con los artículos constitucionales cuya protección invoca. Por estas razones, el que suscribe pide al C. Juez que en atención á que la secuela del juicio de amparo es de tan corta duración por la brevedad perentoria de sus términos, y á que el perjuicio no es irreparable, si la Suprema Corte llegare á otorgar el amparo, no decreta la suspensión, y sí otorgue el amparo en lo concerniente á la violación de los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución que se han violado en la persona del C. Antúnez con la grave y excesiva pena que se le impuso privándole de la percepción absoluta del sueldo durante seis meses. México, Febrero 8 de 1873.—  
*Francisco G. Moctezuma.*

*Sentencia del C. juez de Distrito.*

México, Marzo 6 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Mariano Antúnez contra la primera sala del Tribunal superior del Distrito á virtud de reputar violadas en su persona, con la resolución dictada en 17 de Enero del presente año, suspendiendo en el cargo de juez 2º de lo civil y privando de sus sueldos por seis meses al relacionado quejoso, las garantías individuales que otorgan los artículos 14, 20 y 22 de la Constitución; visto el informe de la expresada primera sala que como autoridad responsable ha debido rendir; el justificante exhibido; el pedimento fiscal y demás que ha debido verse; atendiendo á que la violación indicada se hace consistir en que por el fallo de la primera sala del Tribunal superior del Distrito se hizo aplicación como pena y en contra del C. Antúnez de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimientos, dando á su aplicación efecto retroactivo (art. 14) y aplicando esta pena sin la observancia debida de los artículos 20 y 22 de la misma Constitución y considerando: primero: que las prevenciones del art. 20, si bien es indudable deben ser observadas y acatarse por todas las autoridades en su caso, hay que tener presente que dichas disposiciones se contraen como lo indica el mismo artículo, al juicio en forma y no cuando la autoridad que se reputa infractora, facultada por la ley, procede de plano por la vía de apremio, fuera de juicio ó castigando con el carácter de corrección, pues en tales casos el juicio y por consiguiente la obligación estricta de acatar lo prevenido en las fracciones del citado artículo veinte, tiene lugar tan luego como por la oposición de la parte ó por el procedimiento que marca la ley deba verificarse aquel; que este concepto se robustece con los términos de que se usa en la primera parte del artículo 21 y por la razón y conveniencia pública que existe para que los Tribunales superiores puedan ejercer la autoridad en corregir y castigar de plano las

faltas y abusos que en el desempeño de su cargo cometan otros funcionarios y empleados y sin que esto pueda decirse dé lugar á cometer atentados, puesto que en la escala de funcionarios y demas autoridades debe existir la superioridad para revocar la pena ó correccion indebidamente impuestas, y el juicio respectivo para ventilar el hecho y la debida ó nó aplicacion de la pena. Considerando 2º, en cuanto á la violacion que se pretende del artículo 22, como multa excesiva la privacion de sueldo impuesta al quejoso, y aun en el supuesto de reputar la dicha privacion de sueldo, atento la suspension de empleo, como multa propiamente tal siendo como es relativa la palabra excesiva de que usa la Constitucion, sería necesario la prueba ó constancia que haga patente el exceso á efecto de calificar como violada la garantía del artículo 22; y considerando 3º, en cuanto al artículo 14: que la no retroactividad en la aplicacion de las leyes, principio garantizado por la misma Constitucion, tiene por objeto el impedir que la seguridad personal sea violada castigándose hechos anteriores con arreglo á ley posterior, ó que derechos legitimamente adquiridos sean destruidos ó variados por leyes contrarias á las preexistentes (Eserich Dig de Leg § efec. retroac); y en el caso, al hacerse por la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito la aplicacion al quejoso de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimientos, esto se verificó dando á dichos artículos un efecto retroactivo, puesto que con anterioridad á la promulgacion y vigencia del citado Código, el quince de Setiembre del año próximo pasado, el C. Antunez como juez segundo de lo civil, habia ya proveido en la inhibicion, recusacion ó competencia, á virtud de cuyo hecho se le aplicó por la espresada primera Sala la pena ó castigo designado por ley posterior, lo que está justificado por el testimonio de la sentencia exhibida; de este documento aparece, que con fecha 14 de Setiembre del mismo año (próximo pasado) se pidió al referido juez 2º la remi-

sion del expediente ó informe, á fin de revisarse por la superioridad; y considerando por último: que si bien por regla general en punto á procedimiento no se verifica la retroactividad que prohíbe la ley, debe tenerse presente que en el caso se ha tratado, no de un simple y mero trámite que debe arreglarse á tal ó cual ley de procedimientos, sino á la aplicacion de una pena ó correccion, es decir, á «castigar un hecho anterior con arreglo á una ley posterior», lo que aun por disposiciones muy antiguas se establece su prohibicion, como es por la ley 1ª tit. 5º lib. 4º del Fuero Juzgo, en que se previene «que el delincuente reciba la pena que debía haber en el tiempo de la culpa y no en el de la sentencia». Por tales consideraciones pues, y atento lo pedido por la parte fiscal, se declara: 1º, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic Mariano Antunez por haberse violado en su persona, con la aplicacion que de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimientos hizo la primera Sala del Tribunal superior del Distrito, la garantía individual que determina el artículo 14 de la Constitucion. 2º No se ampara ni protege al quejoso en cuanto á las garantías que establecen los artículos 20 y 22, por no haberse violado estas en el caso con el mencionado procedimiento del mismo Tribunal. Hágase saber; remítase copia de este fallo al «Diario Oficial y Semanario Judicial», y elévense los autos, previa citacion fiscal, á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic José Mª Canalizo.

—Doy fé.—*José María Canalizo*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Marzo 11 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 21 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el Juez 2º de lo civil de esta Capital, Lic. D. Mariano Antunez, contra el auto de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito que lo suspendió por seis meses privándolo del sueldo por igual tiempo; el informe de la autoridad; lo pedido por el Promotor Fiscal; la sentencia del Juzgado de Distrito que ampara y protege al quejoso, con todo lo demás que ver convino, y considerando: que la violación de las garantías consignadas en los artículos 14, 20 y 22 de la Constitución federal de que se queja el Juez Lic. Antunez por haberse aplicado en su contra las disposiciones del Código de Procedimientos por hechos anteriores á la publicación de este, no se ha verificado en el caso, porque la competencia entre el Juzgado 3º y el 2º de lo civil que dió origen á la suspensión y privación de sueldo del Juez Antunez no terminó de parte de él antes de la publicación y vigencia de dicho Código, pues todavía en 25 de Setiembre de 1872 remitió su informe relativo á la competencia á la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito; en esa fecha ya regía el Código, y con posterioridad, al dirimirse la competencia, fué cuando la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito decretó la suspensión y privación de sueldo, contra cuya disposición se pide el amparo emitiéndose como fundamento que se ha dado efecto retroactivo al Código, lo cual no ha sucedido; por lo expuesto y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada el 6 de Marzo último por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad en la parte que concede el amparo, y se decreta: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al Juez 2º de lo civil de esta Ciudad Lic. D. Mariano Antunez, contra el auto de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito que lo suspendió por seis

meses y lo privó de sueldo por igual tiempo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron—*Pedro Ogaszon.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simón Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—L. Mª Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 10 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México por el General D. Felipe B. Berriozabal, contra una disposición del Juzgado 3º de lo civil de esa Ciudad, por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. General Felipe Berriozabal, contra las resoluciones dictadas por el C. Juez 3º de lo civil á petición del C. Lic. Manuel Dublan, en representación del C. Mariano Riva Palacio, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prevenida por la ley dice: que la justificación de V. se ha de servir declarar en definitivo, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Berriozabal contra las determinaciones del C. Juez 3º de lo civil, por que con ellas se